

La derecha política gobernante en Castilla-La Mancha y con el poder casi total en España tiene un firme propósito que es acabar con el componente social del Estado y que proclama en primer lugar el artículo uno de nuestra Constitución.

Tras el terror que supusieron las dos guerras mundiales, Europa cimentó su reconstrucción a través de unos estados más protagonistas en la vida de las personas, que además de configurarse con unos sistemas democráticos de gobierno y en los que primaba el imperio de la ley sobre los privilegios, contaban con un fuerte contenido social, que iba a ser el antídoto frente a las tensiones sociales y económicas que derivaron en las dos guerras de la primera mitad del siglo XX.

Sobre este modelo, que a partir de los años sesenta se fue a llamar "Estado del bienestar" se encaja la aspiración política y social que tras la recuperación de la democracia en España traza nuestra Constitución.

Para hacer efectiva la igualdad entre ciudadanos se arbitra una sanidad pública y universal, una educación igual para todos y todas, unos servicios sociales públicos que pasen de la beneficencia a la justicia social, un sistema de pensiones público y, por último, la garantía de dignidad de las personas dependientes y las más débiles.

La derecha nunca ha sido partidaria de estos instrumentos. Enfundada en la bandera del liberalismo, bajo la que se encuentra la piel más dura del capitalismo, su objetivo es primar las actuaciones económicas de los agentes individuales, personas y empresas privadas, sobre las acciones de la sociedad organizada en grupos (asociaciones, sindicatos...).

Por ello, el PP pone tanto énfasis en todo lo que garantice la "libertad de actuación de los agentes individuales" en la economía y ven al Estado del bienestar como una amenaza para la libertad individual; y deben recuperar para "el negocio privado" campos tan lucrativos como la sanidad, la educación, las pensiones...

¿El fin del Estado Social?

Javier Ortega
Secretario de Formación CCOO Albacete

Para ello se apoyan en dos perfectas coartadas. La primera es el debilitamiento del modelo político actual tras treinta años de democracia efectiva y que indudablemente necesita avanzar a una mayor democracia ciudadana, pero que ha generado una desafección en la gente que hace no valorar ni defender aquellas viejas conquistas sociales que hoy se dan por amortizadas.

La segunda coartada es perfecta: una gran crisis económica que el mismo capitalismo financiero ha ocasionado y a lomos de la que cabalga para alcanzar el poder.

Todo ello se materializa a través de una política de ajustes y recortes brutales sobre los componentes básicos del modelo social bajo el mantra del déficit cero, pero que por fin abre la caja de pandora que tanto ansían los ultraliberales: la gestión privada de la sanidad, la educación concertada generalizada y reducir a la beneficencia los servicios sociales. Si a esto sumamos la desaparición de las garantías laborales y del sistema público de la Seguridad Social se cierra el círculo que dinamita el Estado Social.

Por ello, las recetas del PP para la crisis, en palabras del premio novel de economía Paul Krugman están suponiendo una sangría a nuestra economía, como antiguamente se hacía con los enfermos para extraerles los "humores malignos", se les sangraba para que mejoraran, pero lo que conseguía era que cada vez estuvieran más débiles, si finalmente no morían.

Si seguimos sangrando a nuestro modelo social, este nunca mejorará. En vez de tratarlo con medidas que estimulen el consumo o que mejoren los ingresos y distribuyan los esfuerzos de forma equitativa, el PP sigue la fórmula de sangrar y sangrar.

Un ejemplo palmario de lo que se pretende en el ámbito laboral con el intolerable desempleo que hay en nuestro país, es que una reforma laboral en la línea que sostiene la CEOE y aplaude el PP solo va a debilitar los derechos de los trabajadores y trabajadora, pero nunca a mejorar la creación de empleo.

"El mercado laboral debe ser una autopista para que los empresarios podamos contratar y despedir", dijo recientemente un dirigente de la CEOE, los trabajadores serán los que paguen el peaje de esa autopista y a los que se podrá arrojar por la ventana en cualquier momento a conveniencia.

Existe una gran mayoría social que no puede permitirse esta deriva hacia la desaparición del Estado Social. Hay que dejar a un lado el miedo, la desesperanza y la resignación para pasar con firmeza y responsabilidad a exigir la defensa del modelo social.

Poco a poco van surgiendo plataformas ciudadanas y de trabajadores y trabajadoras que frente a estos ataques se organizan y quieren trasladar a esa mayoría social cauces de movilización y participación democrática, ejemplo de esta es la recientemente creada en Albacete a favor de los servicios públicos impulsada por el sindicato Comisiones Obreras y más de veinte organizaciones sociales.

El Estado Social es el garante de la libertad y de la igualdad que pregona nuestra Constitución. La igualdad entre ciudadanos es sobre la base de que somos ciudadanos libres, pero sin igualdad efectiva no podemos ser ciudadanos libres.

La desaparición del Estado social llevará indefectiblemente a desigualdad y por tanto a la falta de libertad.

La derecha política tiene un firme propósito: acabar con el componente social del Estado

La derecha nunca ha sido partidaria de elementos que permiten hacer efectiva la igualdad entre ciudadanos (sanidad y educación pública y universal, servicios sociales públicos, sistema de pensiones público...)

Su objetivo es primar las actuaciones económicas de los agentes individuales, personas y empresas privadas, sobre las acciones de la sociedad organizada en grupos

Las recetas del PP para la crisis, en palabras del premio novel de economía Paul Krugman están suponiendo una sangría a nuestra economía

En vez de poner en marcha medidas que estimulen el consumo o que mejoren los ingresos y distribuyan los esfuerzos de forma equitativa, el PP sigue la fórmula de sangrar y sangrar